



**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS
UNIDAD DE INFORMATICA LEGISLATIVA**

**LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL
ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI**

Fecha de Aprobación:	10 DE ABRIL DE 2008
Fecha de Promulgación:	17 DE ABRIL DE 2008
Fecha de Publicación:	17 DE ABRIL DE 2008
Fecha de Última Reforma:	05 AGOSTO DE 2014

Estimado Usuario:

La edición de las disposiciones jurídicas del ámbito Federal o Estatal, en medios electrónicos no representa una versión oficial, ya que de acuerdo al artículo 3º del Código Civil Federal; los artículos 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley del Diario Oficial de la Federación; los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí; y el artículo 2º del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, las únicas publicaciones que dan validez jurídica a una norma es el propio Diario Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial del Distrito Federal o los Periódicos Oficiales Estatales, en este caso el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI

ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: EL MARTES 05 DE AGOSTO DE 2014.

Ley publicada en el Periódico Oficial, el martes 17 de Abril de 2008.

MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed:

Que la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO 353

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI

EXPOSICION DE MOTIVOS

Para alcanzar el desarrollo social el gran desafío es combatir la pobreza y garantizar a todos los ciudadanos su derecho a la educación, la salud y la alimentación, a una vivienda digna, al empleo con seguridad social y al disfrute de un medio ambiente sano; así como lo establece la Ley General de Desarrollo Social.

En el marco de la Ley General corresponde a las legislaturas de las entidades federativas emitir normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades, para que en congruencia con las disposiciones nacionales, la población del Estado tenga acceso, sin limitaciones, ni discriminación alguna, a sus garantías sociales consagradas en nuestra Carta Magna.

En la agenda de Política de Desarrollo Social del Ejecutivo del Estado, existe especial interés por colocar en el marco jurídico vigente, los derechos para el desarrollo social que tiene la población; por ello, se expresa la voluntad del Ejecutivo Estatal en el sentido de asegurar en un instrumento normativo, los mecanismos necesarios para el establecimiento de una política de desarrollo social de largo plazo.

Actualmente la marginación social tiene su expresión más crítica en la población dispersa del Estado San Luis Potosí. Es la tercer Entidad en el país con mayor porcentaje de población, en 6,344 localidades con menos de 500 habitantes, que es el 19.4% equivalente a 468,177 personas; 37.4% de población rural que representa 900,449 habitantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2005 del INEGI

Actualmente la marginación social tiene su expresión más crítica en la población dispersa del Estado San Luis Potosí. Es la tercer Entidad en el país con mayor porcentaje de población, en 6,344 localidades con menos de 500 habitantes, que es el 19.4% equivalente a 468,177 personas; 37.4% de población rural que representa 900,449 habitantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2005 del INEGI.

La marginación y la pobreza que la padecen, acceder de forma estable a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de alimentación; de educación básica para sus hijos; de servicios de salud oportunos y permanentes; de una vivienda adecuada con servicios y activos domésticos básicos; de un empleo con seguridad social y dignamente remunerado; de un medio ambiente sano; y de recursos naturales que garanticen su disfrute para las próximas generaciones.

Las personas que padecen estas limitaciones no tienen la oportunidad para elegir y de alcanzar el proyecto de vida que se han trazado. Lo que una persona puede ser o hacer, establece su calidad de vida como ser humano. Por ello, legislar para el desarrollo social es un compromiso con la sociedad en especial para la que vive en pobreza, para buscar que tengan las mismas

oportunidades de desarrollar sus aspiraciones a plenitud y, mejorar así, sus condiciones de vida.

El Ejecutivo Estatal y los legisladores del Honorable Congreso del Estado, comparten la opinión de que la finalidad de una política social para la Entidad, es instituir en un instrumento normativo las medidas para asegurar el acceso al desarrollo social a todos; sin discriminación por motivo de raza, origen étnico, credo, género, condición social o cualquier otro. Una ley sobre la materia debe articular de manera congruente, las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, para que haya continuidad, coherencia, focalización e impacto en el bienestar social, eliminando respuestas aisladas que puedan otorgarse ante los retos del combate a la pobreza.

Por tal motivo, diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, y las áreas competentes del Poder Ejecutivo, dieron inicio de manera conjunta al estudio de la Ley General de Desarrollo Social, así como de las leyes en la materia de otras entidades federativas, con el propósito de formalizar en un instrumento jurídico, las atribuciones que en materia de desarrollo social corresponden a nuestra Entidad; nutriéndolo desde luego, con las particularidades de la propia realidad social y en armonía con el marco jurídico vigente, análisis que dio sustento a la presente Norma.

Bajo los principios de libertad, justicia distributiva y solidaridad, esta Ley privilegia la atención a los diversos grupos sociales que, por su vulnerabilidad económica, requieren de la atención especial y comprometida de los sectores público, privado y social, para atender sus carencias personales; superar el rezago social de sus localidades, colonias y barrios; crear oportunidades de progreso; y fortalecer su capacidad de elegir los medios para su desarrollo personal y familiar.

En San Luis Potosí la presencia de poco más de 230 mil personas hablantes de lengua indígena, le otorga al Estado un carácter pluriétnico, ya que una de cada diez personas tiene origen Náhuatl, Tének o Xi'Oi; lo que imprime una riqueza cultural a nuestra población por sus tradiciones, formas de organización, expresiones artísticas, lengua y costumbres. Los pueblos indígenas encontrarán en esta Ley la seguridad de ser atendidos e informados sobre los beneficios de los programas sociales.

Para el Ejecutivo Estatal la clave para reducir la marginación y la pobreza, es la orientación del gasto social hacia la atención de las necesidades esenciales de la gente y el desarrollo de sus capacidades. Para ello se requiere de una atención focalizada y de una coordinación efectiva de los tres órdenes de gobierno, y del Poder Legislativo.

Se propone en esta Ley crear el Sistema Estatal de Desarrollo Social, como mecanismo de coordinación interinstitucional, para establecer la concurrencia de las entidades de la administración pública estatal y municipal, en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política social a partir de sus respectivos ámbitos de competencia.

El sistema mantendrá un diálogo abierto, de coordinación y compromiso con los tres ámbitos de gobierno y el Poder Legislativo, así como con la sociedad en sus distintas formas de organización; para hacer posible un pacto corresponsable con los que menos tienen y lograr su incorporación a los beneficios del desarrollo, no sólo en el corto, sino en el largo plazo y de manera sustentable.

La concurrencia de todos en la planeación, diseño y ejecución de acciones para el desarrollo social, social, le darán vida en las políticas públicas, a las diversas voces y rostros en que se manifiesta la pobreza y la desigualdad social, y serán temas prioritarios en la agenda social de toda administración estatal y municipal. Ese es el principal objetivo de esta Ley, garantizar permanencia, continuidad, unidad, oportunidades y bienestar.

En este Ordenamiento se contemplan las atribuciones de los municipios en el ámbito de su competencia, para diseñar políticas propias y para coordinarse con la Federación, el Estado y con otros municipios, para llevar a cabo programas sociales. Los principios y preceptos de política social establecidos, rigen para todos los órdenes de gobierno, y prevalece en todos como condición indispensable la participación de la sociedad, la corresponsabilidad, el ejercicio transparente de recursos y la rendición de cuentas.

Se enfatiza el desarrollo local como base para impulsar el desarrollo de los municipios. Las localidades pobres de nuestro Estado, aun las que padecen críticas de marginación han

adquirido una nueva actitud y disposición acerca de los programas de gobierno. Cuestionan y exigen más, pero también están dispuestas a participar activamente cuando encuentran condiciones para ello; situación que se recoge para traducirla en el tema del desarrollo local, en el que se abren espacios a la participación comunitaria, para darle una mejor orientación y contenido a los programas dirigidos a impulsar su potencial productivo y social.

En el desarrollo local las personas y las familias serán el eje de la política social donde se abarcan todos los aspectos del ser humano, tanto socioeducativos, como materiales; para fomentar un cambio de actitud favorable a la acción de sus gobiernos municipales; para colocar a la corresponsabilidad como un valor comunitario; y el compromiso de resolver los problemas colectivos con unidad, disposición y dignidad.

Se fortalece la participación ciudadana desde lo local, lo municipal y en el ámbito del Estado. Bajo la premisa de el combate a la responsabilidad de todos, esta Ley contempla mecanismos para convocar y capitalizar la participación de los sectores sociales organizados y de la iniciativa privada, en un Consejo Consultivo de Desarrollo Social, en el que se recojan experiencias, se den soluciones creativas, se promuevan proyectos, y se participe en el cumplimiento de los objetivos de la política de desarrollo social.

Por otra parte, con la intención de adoptar criterios de permanencia de los programas sociales, se regulan los mismos a través del cumplimiento de determinados elementos como el Padrón de Beneficiarios, que permitirá eficientar el ejercicio del gasto social, evitar la duplicación de apoyos, servicios y subsidios, definir la cobertura territorial y permitir una mejor rendición de cuentas.

Se plantea también que los programas sociales, en tanto son financiados con recursos públicos, es un deber y un compromiso para las autoridades, que los mismos operen con transparencia, honestidad y eficacia.

En este tenor se prevén mecanismos para la evaluación de la política de desarrollo social, y da apertura a la intervención de organismos externos a la gestión pública, para que valoren el ejercicio de los recursos, sus alcances e impactos en el combate a la pobreza y el desarrollo social y humano; se establezcan indicadores y se mida el abatimiento de los rezagos sociales. Adicionalmente, se prevé que los resultados deben ser difundidos para el conocimiento de la población.

La evaluación es una práctica que invariablemente incluirá indicadores para medir la cobertura y calidad de los programas sociales, y tendrá periodicidad, de tal manera que se revelen los avances de la política en la materia, tanto del Estado, como de los municipios. Esta constituye una de las etapas más importantes de la política social, porque permite medir el desempeño institucional, valorar los resultados de los programas y ponderar su eficiencia. Las evaluaciones deberán ser objetivas, imparciales y oportunas.

Los beneficiarios de los programas sociales contarán con instrumentos para verificar el cumplimiento de objetivos y metas, y podrán constituir contralorías sociales. Estas figuras además, podrán vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados a estos programas.

Se contempla la denuncia popular como mecanismo para que las personas y organizaciones de la sociedad civil, puedan presentar denuncias por incumplimiento de los programas sociales. Se otorga a los ciudadanos el derecho a saber y conocer la acción de gobierno en política social, y su obligación de mostrar con transparencia cómo se aplican los recursos.

El Ejecutivo Estatal, los municipios y el Poder Legislativo, asumen el compromiso de construir una sociedad cada vez más incluyente y humana, creando oportunidades en condiciones de igualdad; ganándole terreno a la pobreza y la marginación; sumando voluntades para hacer valer, conforme lo propone esta Ley, los derechos para el desarrollo social.

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado y tiene por objeto:

I. Regular la competencia que en materia de desarrollo social prevé para el Gobierno del Estado; y los municipios de la Entidad, la Ley General de Desarrollo Social;

II. Establecer el Sistema Estatal de Desarrollo Social;

III. Establecer las bases para la formulación y ejecución del Programa de Desarrollo Social para el Estado, que estará a cargo del Ejecutivo Estatal;

IV. Sentar las bases para que los ayuntamientos formulen sus respectivos programas municipales de desarrollo social;

V. Armonizar la política estatal y municipal en materia de desarrollo social, con la que establezca la Federación, en un marco de respeto a sus respectivos ámbitos de competencia;

VI. Establecer los criterios de coordinación para el diseño de estrategias conjuntas de los tres órdenes de gobierno, que tengan como finalidad la atención de regiones y sectores de población prioritarios, en el combate a la pobreza y la marginación en el Estado y municipios;

VII. Establecer las bases y los mecanismos para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo social del Estado y municipios;

VIII. Garantizar la calidad de los programas de desarrollo social a cargo del Gobierno del Estado y de los municipios, así como su eficiente aplicación con apego a la equidad y la justicia social;

IX. Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los programas y la aplicación de los recursos para el desarrollo social, a través de mecanismos de participación social, evaluación y acceso a la información pública;

X. Impulsar la participación ciudadana estableciendo mecanismos para que la sociedad civil sea corresponsable, en el cumplimiento de los objetivos de la política estatal y municipal en materia de desarrollo social;

XI. Impulsar el desarrollo de la economía social, rural y urbana, como premisa para la generación de empleos e ingresos para la población en condiciones de pobreza, y

XII. impulsar el desarrollo social desde las localidades, colonias y barrios, como unidades básicas de cambio, donde la familia sea el eje y principio de la política social para el mejoramiento corresponsable de su entorno comunitario.

(REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010)

ARTICULO 2. La aplicación de la presente Ley corresponde a las dependencias, organismos y entidades del Ejecutivo del Estado, y de los municipios, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia; así como al Poder Legislativo del Estado, de acuerdo a sus atribuciones que le competen.

ARTICULO 3 En todo, lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

ARTICULO 4 Queda prohibida toda práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social.

ARTICULO 5 Los principios de la política de desarrollo social, que constituyen el marco en el cual deberán planearse, ejecutarse y evaluarse, los programas y acciones en materia de desarrollo

social de la administración pública estatal y municipal, son:

I. Integralidad: la articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de las políticas de desarrollo social de los tres ámbitos de gobierno;

II. Justicia distributiva: la garantía de que toda persona reciba de manera equitativa los beneficios del desarrollo, conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas;

III. Libertad: la capacidad de las personas de elegir los medios para su desarrollo personal y para participar en el desarrollo social;

IV. Libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas: el respeto y reconocimiento en el marco constitucional, a las formas internas de convivencia y de organización de las comunidades indígenas;

V. Participación social: el derecho de las personas y organizaciones a integrarse individual o colectivamente, en el cumplimiento de los objetivos de las políticas, programas y acciones del desarrollo social;

VI. Respeto a la diversidad: la promoción de un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias, dando reconocimiento a todas las personas en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra, para superar toda condición de discriminación;

VII. Solidaridad: la colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de Gobierno, para que de manera corresponsable sean la base del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

VIII. Sustentabilidad: la preservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, y

IX. Transparencia: la información relativa al desarrollo social debe ser pública, objetiva, oportuna, sistemática y veraz, en los términos de las leyes de la materia.

ARTICULO 6. Para los efectos de la presente Ley se entiende por:

I. Beneficiarios: las personas que forman parte de la población atendida por los programas sociales, que cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente;

II. Consejo Consultivo: el Consejo Consultivo de Desarrollo Social del Estado;

III. CONAPO: Consejo Nacional de Población;

IV. .CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

V. Corresponsabilidad: es la intervención comprometida de todos los actores involucrados en el combate a la pobreza y el desarrollo social, para buscar soluciones a los problemas compartidos, y aportar trabajo técnico, mano de obra, recursos económicos y materiales, en la medida de las posibilidades de las partes, que permitan superar rezagos sociales;

VI. Desarrollo humano: es un proceso permanente que genera las condiciones que permiten a las personas detonar sus potencialidades, a través de un conjunto de oportunidades de valor, políticas, económicas o sociales, orientadas a lograr una mejor calidad de vida;

VII. Desarrollo local: es un proceso orientado a lograr la cooperación de los sectores público, privado y social, bajo un enfoque multidimensional e integrador, para impulsar con la participación permanente y creadora de la población, un proyecto común que eleve su calidad de vida, y articule lo local con el desarrollo municipal y estatal;

VIII. Desarrollo social: entorno donde las personas y las familias acceden, de manera estable, a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda y empleo dignos, que aseguran el pleno ejercicio de su libertad para elegir y alcanzar su proyecto de vida;

IX. Desigualdad social: diferencia que guardan las personas de una misma sociedad, generada por su forma de acceso al empleo y al ingreso, y a las condiciones estructurales del mercado de trabajo;

X. Ley de Planeación: la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí;

XI. Marginación: la exclusión de los grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios, que expone a las personas, familias y localidades, a privaciones, riesgos y vulnerabilidad social;

(REFORMADA P.O. 22 DE JULIO DE 2010)

XII. Padrón: la relación oficial de los beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas de desarrollo social de los diversos órdenes de gobierno, cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente;

XIII. Personas en situación de vulnerabilidad: los núcleos de población que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación y, por lo tanto, requieren de la atención de los sectores público, privado y social para disminuir sus desventajas;

XIV. Pobreza: la situación que padecen las personas, familias y comunidades que carecen de lo necesario para su sustento, por su reducida capacidad de ingreso o por la falta de desarrollo de sus capacidades;

XV. Política de desarrollo social: el conjunto de programas, proyectos y acciones tendientes a reducir las brechas de desigualdad, pobreza, marginación y exclusión social, que potencian y garantizan el desarrollo sostenible y con equidad, que se transforme en bienestar y mejor calidad de vida para la sociedad;

XVI. Programas de desarrollo social: son los instrumentos de planeación, en los que se establecen los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción que orientan el quehacer del Estado y de los Municipios, en materia de política social, y cuyas acciones específicas se instrumentan a través de programas sociales;

XVII. Programa estatal: el Programa Estatal de Desarrollo Social, que contiene los lineamientos de la política estatal en la materia;

XVIII. Programa municipal: el programa de desarrollo social que cada municipio debe formular, en concordancia con los programas nacional y estatal en la materia;

XIX. Programas sociales: los programas, proyectos y acciones derivadas de los objetivos de los programas estatal, y municipales, que de manera ordenada y sistemática se orientan a superar uno o más rezagos en servicios e infraestructura básica, a fomentar la economía social, o a apoyar directamente a las familias o grupos sociales en situación de desventaja o vulnerabilidad;

XX. Secretaría ejecutiva: la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado, y

XXI. Sistema estatal: el Sistema Estatal de Desarrollo Social.

TITULO SEGUNDO

DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

CAPITULO I

Del Sistema Estatal de Desarrollo Social

ARTICULO 7 El Sistema Estatal de Desarrollo Social es un mecanismo de coordinación interinstitucional y concertación social; y será el órgano rector del desarrollo social del Estado en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de la materia.

ARTICULO 8. El Sistema Estatal se integrará por:

I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

II. Una Secretaría Ejecutiva, a cargo del titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional,
y

III. Las siguientes vocalías a cargo de los titulares de:

a) Secretaría de Salud.

b) Secretaría de Educación.

c) Secretaría de Desarrollo Económico.'

d) Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.

e) Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

f) Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.

g) Secretaría de Cultura.

h) Secretaría de Turismo.

i) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.

j) La Comisión Estatal del Agua.

k) La Coordinación Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

l) El Instituto de la Vivienda del Estado.

m) La Junta Estatal de Caminos.

n) Los secretarios del Ramo y titulares de las entidades de la administración pública del Estado, que acuerde el Presidente del Sistema.

Los titulares que formen parte del Sistema Estatal, podrán nombrar representantes para participar en las comisiones de trabajo que se formen.

ARTICULO 9. El Sistema Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer la concurrencia de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de la política social, a partir de sus respectivos ámbitos de competencia;

II. Coordinar con los sectores social y privado, de manera armónica, complementaria y convenida, su participación en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la política estatal de desarrollo social;

III. Formular el Programa Estatal con base en lo establecido en la presente Ley, teniendo como marco de referencia los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, y del Programa Nacional en la materia, y considerando la normatividad que al efecto señale la Ley de Planeación;

IV. Evaluar de manera interna y externa el Programa Estatal para conocer sus resultados e impactos en el combate a la pobreza, la marginación y la desigualdad social, para corregirlo, modificarlo, adicionarlo o reorientarlo;

V. Aprobar los programas sociales que presenten las diversas dependencias y entidades integrantes del mismo;

VI. Integrar comisiones de trabajo, temáticas y regionales, para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas, Estatal y municipales, de desarrollo social;

VII. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social, en los términos que señala la Ley General de Desarrollo Social;

VIII. Fomentar la participación de instituciones y asociaciones civiles, académicas y de investigación, en la planeación, ejecución y evaluación de la Política Estatal de Desarrollo Social; Celebrar convenios con el Gobierno Federal para la aportación de recursos, a los programas sociales del Estado;

IX. Celebrar convenios con el Gobierno Federal para las aportaciones de recursos, a los

programas sociales del Estado;

X. Buscar mecanismos de financiamiento complementarios para el desarrollo social, en el sector privado nacional e internacional;

XI. Acordar con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, involucradas en los programas sociales, la aportación de recursos para su ejecución;

XII. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de superación de la pobreza;

XIII. Revisar; el marco normativo del desarrollo social y, en su caso, proponer y promover modificaciones ante las instancias competentes;

XIV. Integrar los padrones de beneficiarios de los diversos programas sociales, y entregarlos a la Secretaría Ejecutiva, para los efectos que señala la presente Ley, y

XV. Informar a la sociedad sobre los avances en tomo al desarrollo social y el alcance de los objetivos del Programa Estatal.

ARTICULO 10. Los acuerdos del Sistema Estatal serán obligatorios para las dependencias, entidades y organismos del Ejecutivo Estatal.

ARTICULO 11. El Sistema Estatal sesionará de manera ordinaria cuando menos trimestralmente; y de forma extraordinaria cuando resulte necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.

Para que el Sistema Estatal pueda sesionar se requiere de la presencia de más de la mitad de sus miembros.

ARTICULO 12. Para el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Elaborar el proyecto de Programa Estatal de Desarrollo Social, considerando lo dispuesto en la presente Ley, en la Ley de Planeación, y en los planes Nacional, y Estatal de Desarrollo; y presentarlo para su análisis y, en su caso, aprobación al Sistema Estatal;

II. Realizar gestiones interinstitucionales para que el Programa Estatal y los acuerdos dictados por el Sistema Estatal, alcancen los objetivos previstos;

III. Promover la concurrencia y participación de los municipios en el cumplimiento de los objetivos del Programa Estatal;

IV. Integrar la participación de los sectores público, social y privado, en el cumplimiento de los objetivos; estrategias y metas del Programa Estatal;

V. Administrar los recursos que corresponden a las aportaciones federales transferidas para la infraestructura social del Estado, orientando su ejercicio con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable;

VI. Recibir en el Presupuesto de Egresos del Estado, la asignación de la partida presupuestal correspondiente al Fondo Estatal para la Infraestructura Social, misma que no podrá ser menor a la determinada por la Federación para el Estado; y cuyos recursos podrán ser complementados con aportaciones municipales, de organismos internacionales, y del sector social y privado, para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa Estatal;

VII. Convocar oportunamente a las sesiones del Sistema Estatal a todos sus integrantes; levantar las actas o minutas respectivas; y dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en las mismas;

VIII. Dar seguimiento al ejercicio de los fondos y recursos estatales y federales, descentralizados o convenidos en materia de desarrollo social, de las dependencias, entidades, organismos y municipios, destinados a la ejecución de obras y acciones en la materia, para medir sus impactos

e informar semestralmente de sus resultados al Sistema;

IX. Presentar informes trimestrales al Poder Legislativo, sobre el ejercicio de los fondos municipales que corresponden a las aportaciones federales transferidas y, de las cuales es responsable del seguimiento, por tratarse de recursos que deben beneficiar directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza;

X. Integrar y actualizar los padrones de beneficiarios de los diversos programas sociales, y proporcionarlos al Sistema Estatal cuando éste lo requiera;

(REFORMADA, P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011)

XI. Elaborar el proyecto de informe anual de actividades del Sistema Estatal, y presentarlo al mismo para su aprobación;

(REFORMADA, P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011)

XII. Generar y difundir proyectos de investigación en materia de desarrollo social, y

(ADICIONADA, P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011)

XIII. Las demás que le asigne el Sistema para el cumplimiento de sus atribuciones.

ARTICULO 13. El Gobierno del Estado y los municipios implementarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso, en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a través de programas sociales, destinando los recursos necesarios y estableciendo metas cuantificables, conforme a la normatividad aplicable.

ARTICULO 14. La Secretaría Ejecutiva convocará la participación de los beneficiarios y de la sociedad, en un Consejo Consultivo de Desarrollo Social, de conformación plural; que tendrá por objeto, analizar y formular propuestas sobre las acciones que incidan en el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Programa Estatal.

ARTICULO 15. El Consejo Consultivo se integrará por:

I. Un presidente que será el titular de la Secretaría Ejecutiva, quien podrá ser suplido en sus ausencias por la persona que el mismo designe;

II. Un presidente municipal por cada una de las microregiones del Estado, elegido por insaculación;

III. Un representante del Poder Legislativo del Estado, que será un integrante de la comisión legislativa competente en materia de desarrollo social;

IV. Dos representantes de instituciones académicas o de investigación, relacionadas con el desarrollo social;

V. Dos representantes de organizaciones civiles legalmente constituidas, cuyo objeto sea el desarrollo social;

VI. Dos representantes de la iniciativa privada, y

VII. Dos beneficiarios de programas de desarrollo local.

El Consejo se reunirá a convocatoria de la Secretaría Ejecutiva, cuantas veces resulte necesario para el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO II

De las Atribuciones de los Municipios

ARTICULO 16. Corresponde a los municipios, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

- I. Coordinarse con los gobiernos Federal y el Sistema Estatal, así como con otros municipios, para la ejecución de programas de desarrollo social;
- II. Formular y ejecutar un Programa Municipal de Desarrollo Social, como parte del Plan Municipal de Desarrollo, y en congruencia con el Programa Estatal, considerando la normatividad que al efecto señale la Ley de Planeación;
- III. Realizar gestiones interinstitucionales para que sus programas de desarrollo social alcancen los objetivos previstos;
- IV. Concertar acciones con los sectores social y privado, fomentando su participación en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la política municipal de desarrollo social;
- V. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y acciones de desarrollo social;
- VI. Ejercer fondos y recursos federales y estatales, descentralizados o convenidos en materia de desarrollo social, en los términos de la normatividad respectiva, así como informar a las autoridades federales competentes, a través de la Secretaría Ejecutiva, sobre el avance y resultado de su ejercicio;
- VII. Reservar de su presupuesto anual, una partida de recursos que les permita atender por sí mismos, y con la concurrencia de recursos federales y estatales, los daños que produzca un fenómeno natural cuyos efectos, reduzcan los impactos de las obras y acciones que se hubieran implementado para avanzar en el desarrollo social;
- VIII. Impulsar el desarrollo local privilegiando la superación de los rezagos sociales, en las localidades con mayor concentración de pobreza y marginación;
- IX. Cumplir la responsabilidad de ejercer los recursos públicos destinados al desarrollo social, con honradez, transparencia y equidad;
- X. Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social, y
- XI. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

TITULO TERCERO DE LOS BENEFICIARIOS

CAPITULO I

De los Derechos de los Beneficiarios

ARTICULO 17. Son derechos para el desarrollo social:

- I. La educación;
- II. La salud;
- III. La alimentación;
- IV. La vivienda;
- V. El disfrute de un medio ambiente sano;
- VI. El trabajo y la seguridad social, y

VII. Los relativos a la no discriminación.

ARTICULO 18. Toda persona o grupo social en situación de pobreza, marginación, desigualdad social y vulnerabilidad tiene derecho a:

I. Participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social conforme a los principios rectores enunciados en el artículo 5° de esta Ley, y en los términos que establezca la normatividad de cada programa, y

II. Recibir apoyos a través de acciones tendientes a disminuir su desventaja.

ARTICULO 19. Son derechos de los beneficiarios de los programas sociales los siguientes:

I. Recibir la información acerca de los programas y servicios que promuevan el Sistema Estatal y los municipios; así como de aquéllos que la Federación aplique en la Entidad;

II. Recibir por parte de los oferentes de programas sociales, un trato oportuno, respetuoso y con calidad; asimismo, ser asesorado respecto de los mecanismos para acceder a los programas y alcanzar su desarrollo integral;

III. Solicitar su inclusión, participación y acceso en los programas sociales;

IV. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme a sus lineamientos generales y requisitos, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada, y

V. Presentar denuncias ante las autoridades competentes, por el incumplimiento de esta Ley.

CAPITULO II

De las Obligaciones de los Beneficiarios

ARTICULO 20. Los beneficiarios de los programas sociales tendrán las siguientes obligaciones:

I. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida por las dependencias de la administración pública estatal y municipal, para ser sujetos de apoyo de los programas sociales. Dicha información deberá ser veraz y los datos personales tendrán manejo confidencial;

II. Informar a la Secretaría Ejecutiva, a través de los ejecutores de los programas sociales, las modificaciones a sus datos generales, y de su situación socioeconómica, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a fin de actualizar los respectivos padrones de beneficiarios;

III. Participar corresponsablemente en los programas sociales a que tengan acceso, en términos de lo que establece el artículo 6° de este Ordenamiento, en su definición de corresponsabilidad;

IV. Cumplir la normatividad y requisitos de los programas sociales;

V. Informar a la instancia correspondiente si se es beneficiario de dos o más programas sociales, federales, estatales o municipales, y

VI. Estar inscrito en el padrón de beneficiarios.

ARTICULO 21. Cuando los beneficiarios proporcionen información general y socioeconómica falsa, con el propósito de recibir indebidamente los apoyos y servicios de los programas sociales, las dependencias procederán a suspender la ministración de los mismos, y a solicitar su reintegro aun cuando hayan sido otorgados, así como hacer la anotación respectiva en el padrón correspondiente.

CAPITULO III

De los Padrones de Beneficiarios

ARTICULO 22. El Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal, y los municipios, en sus ámbitos de competencia, integrarán los padrones de beneficiarios, y complementarán los derivados de los programas sociales federales.

ARTICULO 23. Los padrones de beneficiarios serán administrados y actualizados por la Secretaría Ejecutiva.

La Secretaría Ejecutiva constituirá y mantendrá actualizada una base de datos de los diversos padrones, a fin de garantizar que los beneficiarios no se dupliquen, salvo en los casos en que lo permita la normatividad aplicable.

Las autoridades ejecutoras de los programas sociales tendrán la obligación de remitir, oportunamente, a la Secretaría Ejecutiva, las modificaciones de la información de los beneficiarios para mantener actualizados los padrones correspondientes.

ARTICULO 24. Los padrones tendrán por objeto:

I. Hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; promover la corresponsabilidad, así como obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social;

II. Eficientar el ejercicio del gasto social evitando la duplicación de apoyos y la dispersión de los recursos, para ampliar el impacto social de los programas;

III. Transparentar la operación de los programas sociales, permitir la rendición de cuentas y prevenir discrecionalidades en el otorgamiento de los apoyos o servicios de los programas;

IV. Determinar la cobertura poblacional y territorial de los programas sociales para apoyar con mayor eficacia a los beneficiarios, y

V. Contar con bases de datos fidedignas que permitan medir el impacto de la promoción y participación ciudadana para el desarrollo social.

TITULO CUARTO

DE LA POLITICA ESTATAL DE DESARROLLO SOCIAL

CAPITULO I

De los Programas Estatal y Municipales de Desarrollo Social

ARTICULO 25. El Sistema Estatal deberá aprobar al inicio de cada periodo de la administración pública, un Programa Estatal de Desarrollo Social.

El Programa Estatal será el instrumento rector de la política de desarrollo social de la Entidad, y tendrá por objeto, concretar los objetivos establecidos en la materia en el Plan Estatal de Desarrollo.

(ADICIONADO P.O. 29 DE MARZO DE 2011)

ARTICULO 25 BIS. El presupuesto para el desarrollo social, programas sociales, y combate a la pobreza, no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior.

ARTICULO 26. La Secretaría Ejecutiva, previa consulta con las dependencias y entidades

competentes, deberá formular el proyecto de Programa Estatal, y presentarlo al Sistema Estatal durante el segundo semestre del primer año de ejercicio legal de la administración correspondiente, para su discusión, en su caso, modificación, y aprobación.

ARTICULO 27. El Programa Estatal deberá contener cuando menos los lineamientos de política social relativos:

I. Al combate a la marginación social, a través de la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y sus servicios;

II. Al combate a la pobreza y la desigualdad social, a través del fomento de la economía del sector social, y la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, así como del desarrollo regional;

III. A favorecer el desarrollo humano, a través del fomento a la cultura, la promoción del deporte, la atención de grupos vulnerables y el cuidado del medio ambiente;

IV. Al desarrollo local, a través del trabajo directo con las familias para el desarrollo de sus capacidades, la dotación de infraestructura social básica, y el desarrollo de actividades productivas;

V. A la integración territorial y el desarrollo regional, a través del fortalecimiento de la infraestructura básica y oportunidades - de empleo en localidades estratégicas, así como con proyectos que vinculen las economías de las microregiones y regiones, y reduzcan los desequilibrios entre las mismas;

VI. A las formas de participación social, a través de la consulta e integración de las propuestas y demandas de los beneficiarios y grupos de la sociedad civil organizada, y las localidades, en los proyectos y acciones que se emprendan para alcanzar los objetivos de las políticas de desarrollo social de manera corresponsable;

VII. A los mecanismos de coordinación y concertación de los proyectos y acciones con dependencias, entidades, organismos, municipios, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y demás entes involucrados en el desarrollo social;

VIII. A los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, y beneficiarios de los bienes y servicios que se proporcionen, y el monto de los recursos asignados, y

IX. A la evaluación de los resultados e impactos de la política social.

ARTICULO 28. El Programa Estatal deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los treinta días siguientes a su aprobación.

Asimismo, de manera anual el Gobierno del Estado deberá hacer públicos los avances de la política social, contenida en el Programa Estatal.

(ADICIONADO P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011)

(REFORMADO P.O. 05 DE AGOSTO DE 2014)

ARTICULO 28 BIS. Para certificar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, los programas sociales deberán sujetarse a reglas de operación que deberán ser simples y de fácil acceso para los beneficiarios, debiendo precisar en forma clara por lo menos los siguientes aspectos:

I. El diagnóstico situacional que guarda el Estado en el rubro o rubros de atención;

II. Los objetivos del programa;

III. La población objetivo a la que está dirigido;

IV. La entidad o dependencia responsable del programa;

V. La programación presupuestal;

VI. Las metas programadas;

VII. Los procedimientos y requisitos de acceso;

VIII. La temporalidad y la cobertura;

IX. Los mecanismos de evaluación y los indicadores de resultados y gestión;

X. Las formas de participación y corresponsabilidad social, y

XI. La articulación con dependencias y otros programas sociales aplicables.

Las reglas de operación se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, dentro de los quince días posteriores a la publicación del Programa Estatal.

(REFORMADO, P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011)

ARTICULO 29. Los municipios deberán formular y aprobar como parte de su Plan Municipal de Desarrollo, un Programa Municipal de Desarrollo Social, en congruencia con los lineamientos de política social del Programa Estatal y que incluya, en lo que les sea aplicable, lo señalado en los artículos 27 y 28 BIS de la presente Ley, y considerando la normatividad que para el efecto señale la Ley de Planeación.

(ADICIONADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010)

ARTICULO 29 BIS. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social".

CAPITULO II

Del Desarrollo Local

(REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010)

ARTICULO 30. El Sistema Estatal revisará y definirá anualmente, las localidades sujetas a atención prioritaria por sus condiciones de rezago social, e informará al Poder Legislativo sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos del Estado.

La Secretaría Ejecutiva proporcionará la información que permita al Sistema Estatal definir las localidades, teniendo como referente los resultados de medición de pobreza, marginación y desarrollo humano que publiquen el CONAPO, el CONEVAL, y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como la medición de los indicadores respectivos que realice la Secretaría Ejecutiva.

ARTICULO 31. Los programas estatal y municipales de desarrollo social, deberán contener líneas de acción, y programas sociales específicos, para atender a las localidades prioritarias, en términos de lo que establece el artículo 6 de esta Ley, en su definición de desarrollo local.

ARTICULO 32. Para la ejecución de programas sociales de desarrollo local, el Gobierno del Estado y los municipios asignarán los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, para lograr el fortalecimiento de las capacidades de las personas y las familias que conforman estas localidades; así como para fortalecer su infraestructura social y productiva.

ARTICULO 33. Las acciones del Sistema Estatal, y las de los municipios, en las localidades de atención prioritaria, tendrán como objeto:

I. Lograr una mejor calidad y expectativas de vida personal, familiar y social, a través de acciones socioeducativas, proyectos productivos, fomento de la participación comunitaria y corresponsabilidad social, que permitan crear conciencia de la dignidad humana;

II. Generar un entorno social integral favorable que tenga como eje el desarrollo de la familia, y

preserve sus valores para las generaciones presentes y futuras del Estado;

III. Procurar que toda persona reciba los beneficios del desarrollo, y de las políticas y programas sociales, y

IV. Prever los recursos financieros necesarios para dar atención prioritaria a las localidades que por su situación de pobreza y vulnerabilidad, requieran crear infraestructura básica y oportunidades de ocupación para detonar su desarrollo.

CAPITULO III

De la Evaluación

ARTICULO 34. La evaluación de la política de desarrollo social del Estado estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva.

La evaluación será cuando menos anual y tendrá como propósito, revisar sistemáticamente los avances y resultados en el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, proyectos y acciones de política social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos, o suspenderlos, total o parcialmente.

ARTICULO 35. Los ayuntamientos deberán evaluar anualmente los avances y resultados de la política de desarrollo social de sus respectivos municipios, sin perjuicio de que puedan realizarse evaluaciones previas. Al efecto, podrán solicitar a la Secretaría Ejecutiva la orientación técnica que requieran.

ARTICULO 36. La evaluación podrá ser:

I. Interna: la que realizan directamente quienes implementan los programas, proyectos y acciones, y

II. Externa: la que realizan los organismos evaluadores independientes a solicitud del Sistema Estatal; y podrán ser instituciones de educación superior, de investigación científica, u otras organizaciones competentes.

En ambos casos, la evaluación incluirá la opinión de los beneficiarios y deberá darse a conocer al Sistema Estatal, a través de la Secretaría Ejecutiva.

ARTICULO 37. La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a los estudios relativos a la marginación, rezago social, pobreza y desarrollo humano, realizados por el CONAPO, el CONEVAL, y el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, e informará, respectivamente, al Sistema Estatal y a cada ayuntamiento, sobre los resultados y el lugar que ocupa el Estado y su municipio en el contexto nacional.

(REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010)

ARTICULO 38. Las evaluaciones de manera invariable incluirán indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto de los programas sociales.

Las dependencias u organismos estatales o municipales ejecutores de los programas a evaluar, proporcionarán a los evaluadores información veraz, y otorgarán las facilidades necesarias para la realización de los trabajos respectivos.

ARTICULO 39. El Sistema Estatal en función a lo que establece la ley, utilizará la información que genere el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el CONAPO, el CONEVAL, y otras instituciones competentes en la materia, para definir y medir la pobreza.

ARTICULO 40. El Estado y los municipios deberán hacer públicos los resultados de las evaluaciones.

TITULO QUINTO

DE LA PARTICIPACION SOCIAL

CAPITULO I

De la Participación de los Beneficiarios y de la Sociedad

ARTICULO 41. El Gobierno del Estado y los ayuntamientos garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad, a participar de manera corresponsable en la instrumentación de su política de desarrollo social.

ARTICULO 42. La Secretaría Ejecutiva instrumentará los mecanismos para la participación e integración de la sociedad y de los beneficiarios, en el Consejo Consultivo a que se refieren los artículos 14 y 15 de la presente Ley.

ARTICULO 43. Los ayuntamientos establecerán mecanismos propios para incluir la participación de los beneficiarios y de la sociedad, en las acciones y programas sociales que contemple su programa de desarrollo social municipal, conforme a lo establecido en esta Ley.

CAPITULO II

De la Contraloría Social

ARTICULO 44. La Contraloría Social es el instrumento de que disponen los beneficiarios y la sociedad, para verificar el cumplimiento de los programas y acciones de desarrollo social, y la correcta aplicación de los recursos destinados a esta materia.

ARTICULO 45. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, a través de sus respectivos órganos de control y supervisión interna, impulsarán una Contraloría Social, para evaluar y vigilar las acciones relativas al ejercicio de los recursos públicos, y al cumplimiento de los programas y acciones de desarrollo social, a efecto de que se realicen con transparencia, eficacia y honradez; y le facilitarán la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

La contraloría Social se conformará por:

- I. El contralor interno de la dependencia, entidad, o municipio ejecutor;
- II. Beneficiarios, y
- III. Organismos de la sociedad civil.

El Reglamento de esta Ley determinará los mecanismos de selección de los integrantes señalados en las fracciones II y III de este artículo.

ARTICULO 46. Las contralorías internas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y las de los municipios, integrarán al inicio de cada ejercicio fiscal, en su programa anual de auditoria, las acciones que consideren para verificar el ejercicio de los recursos públicos destinados al desarrollo social, con el cumplimiento de los objetivos y metas señaladas en el plan y los programas, así como de la debida observancia de esta Ley.

CAPITULO III

De la Denuncia Popular

(REFORMADO P.O. 05 DE AGOSTO DE 2014)

ARTICULO 47. La denuncia popular es la facultad individual o colectiva de recurrir ante el órgano competente, a interponer queja o denuncia derivada de actos administrativos de gobierno que atenten en contra de los beneficiarios de la presente Ley.

(ADICIONADO P.O. 05 DE AGOSTO DE 2014)

ARTICULO 47. Bis. Toda persona u organización de la sociedad civil podrá presentar ante las contralorías internas de las dependencias estatales o municipales, según corresponda, las denuncias por hechos, actos u omisiones producidas por incumplimiento de los programas sociales, y que atenten en contra de los beneficiarios de esta Ley.

Asimismo, podrán presentar denuncia ante la Contraloría General del Estado o ante la contraloría municipal, según sea el caso, sobre cualquier hecho, acto u omisión que, a su juicio, contravenga las disposiciones establecidas en este Ordenamiento.

La revisión e investigación de estas denuncias se hará, preferentemente, a través de la Contraloría Social.

(REFORMADO P.O. 05 DE AGOSTO DE 2014)

ARTICULO 48. La denuncia podrá presentarse por cualquier persona u organización civil, por escrito, y deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. Nombre o razón social del promovente y, en su caso, el de su representante;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Los actos, hechos u omisiones que denuncia;

IV. La autoridad responsable, y

V. Los elementos de prueba para acreditar su dicho.

ARTICULO 49. Las autoridades que tengan conocimiento de las denuncias presentadas en contra de servidores públicos, deberán turnarlas de manera inmediata a los órganos de control interno competentes, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

ARTICULO 50. Los plazos para responder a las denuncias, y el procedimiento de desahogo, quedarán sujetos a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, según corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil o penal, que puedan derivarse de las mismas.

TITULO SEXTO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Capítulo Único

ARTICULO 51. Los beneficiarios que contravengan las disposiciones de la presente Ley, o de la normatividad de algún programa social, independientemente de lo dispuesto por otros ordenamientos jurídicos, se identificarán en el Padrón correspondiente y se les suspenderá el apoyo social hasta por un año.

ARTICULO 52. El servidor público, estatal o municipal que, valiéndose de su función o en ejercicio de ésta, condicione los apoyos, haga proselitismo a favor de algún partido político o candidato y, en general, contravenga las disposiciones de esta Ley, será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás ordenamientos relativos. En el caso de ser servidor público federal, se deberá informar al órgano de control interno que corresponda.

TITULO SEPTIMO

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

Capítulo Unico

ARTICULO 53. En la resolución de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley, se estará a los plazos y procedimientos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. El titular de Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de esta Ley, en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. El Sistema Estatal de Desarrollo Social del Estado, deberá quedar constituido e instalado dentro de los noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

El Consejo Consultivo deberá integrarse dentro de los treinta días siguientes a la Instalación del Sistema Estatal.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

DADO en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, el diez de abril de dos mil ocho.

Diputado Presidente: Juan Pablo Escobar Martínez, Diputada Primera Secretada: Martha Lilia García Galarza, Diputado Primer Prosecretario, Raúl Paulin Rojas (Rúbricas)

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

DADO en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil ocho.

El Gobernador Constitucional del Estado

**C.P. Marcelo de los Santos Fraga
(Rúbrica)**

El Secretario General de Gobierno

**Lic. Alfonso José Castillo Machuca
(Rúbrica)**

N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

P.O. 22 DE JULIO DE 2010

PRIMERO. Este Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

P.O. 29 DE MARZO DE 2011

PRIMERO. Este Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011-1

PRIMERO. Este Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

P.O. 20 DE OCTUBRE DE 2011-2

PRIMERO. Este Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

P.O. 05 DE AGOSTO DE 2014

PRIMERO. Este Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.